

PERFIL DE DEFENSORES

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 2014

APROBADO POR EL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.



SEGOB

SECRETARÍA TÉCNICA
DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Programa de Capacitación 2014 Perfil de Defensores

I. Descripción general del programa:

En el Sistema de Justicia Penal a implementar, se reconoce para el imputado el derecho a una **defensa material**, por lo tanto, uno de los derechos esenciales es el relativo a una defensa. Esto se traduce, en el nombramiento de un defensor, que desde las reformas constitucionales de junio de 2008 en términos del artículo 20, apartado B, fracción VIII; además debe reunir ciertas cualidades como, ser adecuada y ejercida por un profesional del derecho, abogado o licenciado en derecho. Ha quedado establecido el derecho al nombramiento de un defensor desde la detención; el nombramiento puede recaer en el abogado particular o en uno público. Las reglas a seguir, **tienen como finalidad asegurar el ejercicio de una defensa adecuada o técnica** en todo momento del proceso.

La defensa técnica consiste en el derecho a ser asistido, o defendido por un licenciado en derecho o abogado desde la primera actuación del procedimiento en que intervinga. Lo anterior, es una derivación del derecho de defensa material que surge como consecuencia necesaria del proceso moderno, de su carácter eminentemente **técnico-legal** y de los intereses en juego. Su fundamento radica en la necesidad de garantizar en la medida de lo posible la igualdad de posiciones en el proceso penal; por lo tanto, la ley prevé una serie de mecanismos para mejorar la posición del imputado y garantizar una igualdad de armas entre los contendientes en un proceso penal. El más importante de ellos es la defensa técnica, que permite al imputado contar con la asistencia necesaria cuando no posee conocimientos jurídicos suficientes o cuando, poseyéndolos, no pueda aplicarlos de forma idónea o adecuada.

El Nuevo Proceso Penal impone el derecho del imputado a formular las alegaciones que considere oportunas, así como a intervenir en todas las actuaciones judiciales y en las demás actuaciones del procedimiento. Esto es lo que se conoce como **defensa material**. Asimismo, establece deberes e impone ciertos límites a las actividades de los órganos que intervienen en la persecución penal y el enjuiciamiento penal, a fin de garantizar el derecho de defensa del imputado, su dignidad y autonomía personal.